REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE LOS PATIOS, NORTE SANTANDER
CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO
DISTRITO JUDICIAL DE CUCUTA

RAD: 2021/00213 RAD. FISCALÍA: 540016001134202104299. PROCEDIMIENTO ABREVIADO
PROCESADO: JAVIER CAMILO CELIS MANTILLA
DELITO: HURTO CALIFICADO ATENUADO
DECISIÓN: SENTENCIA POR ACEPTACION DE LA ACUSACION

Los Patios, veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Procede el Despacho a proferir fallo por aceptación de la acusación de JAVIER CAMILO CELIS MANTILLA, por el delito de **HURTO CALIFICADO ATENUADO**, en perjuicio de CARMEN LOANA CAMPILLO LOPEZ.

ANTECEDENTES FACTICOS:

Están relacionado en el escrito de acusación de la siguiente forma: *"JAVIER CAMILO CELIS MANTILLA, fue capturado el 03 de julio de 2021 a las 14:00 horas en la avenida 10 con calle 4, del municipio de Los Patios al ser señalado por la víctima CARMEN LOANA CAMPILLO LOPEZ, como la persona que las abordó y las intimidó con un cuchillo tanto a ella como a su prima YULIETH SANCHEZ LOPEZ y les exigió le entregara el bolso, inicialmente realizó la acción con su prima y posteriormente con Carmen Campillo, quien ante la amenaza entrega el bolso y el sujeto huye, pero la persona víctima de los hechos junto con su amiga solicitan auxilio, ante lo cual la comunidad se solidariza al escuchar las voces de auxilio y emprenden la persecución quitándole el bolso que ya tenía en su poder y se lo entregan a la propietaria Carmen Loana Campillo, afirma la denunciante que inmediatamente llaman a la policía y capturan al sujeto. Estimó el valor de lo hurtado en \$60.000, recuperado por la misma comunidad"*

IDENTIFICACIÓN DEL ACUSADO

JAVIER CAMILO CELIS MANTILLA, identificado con C.C No. 1.092.389.610 de Villa del Rosario – Norte de Santander, nacido el 01 de mayo de 1999, de 22 años de edad, hijo de ALEIDA MANTILLA y GEOVANNY CELIS, residente en la Calle 21 # 19-48 barrio San José de Cúcuta y abonado celular 3204934602. Características morfológicas: 1.80 mts de estatura, piel trigueña, contextura delgada, con ocho (8) tatuajes en el cuerpo.

ANTECEDENTES PROCESALES:

El 04 de julio de 2021 la Fiscalía 21 URI de Cúcuta corrió traslado de escrito de acusación en contra de CELIS MANTILLA, por el delito de HURTO CALIFICADO ATENUADO, ante lo cual el procesado aceptó los cargos formulados y se libró orden de libertad.

El 22 de diciembre de 2021, la Fiscalía Primera Local de Los Patios, radicó escrito de acusación para realización de audiencia de verificación de la aceptación de la acusación, la cual correspondió por reparto a esta Agencia Judicial, avocando conocimiento y señalando el 10 de febrero de 2022 para la realización de la respectiva audiencia.

El 10 de febrero de 2022, el defensor indicó la voluntad de su defendido de indemnizar a la víctima, por tanto, solicitó el aplazamiento de la diligencia. El despacho accedió a la solicitud y señaló como fecha el 19 de abril de 2022.

El 19 de abril de 2022 no se llevó a cabo la diligencia por inasistencia del defensor y la fiscalía. Se señaló como fecha el 10 de junio de 2022, diligencia en la cual se verificó la legalidad de la aceptación de acusación, se emitió sentido de fallo condenatorio e individualización de la pena al tenor del art. 447 del C.P.P. y se suspendió a solicitud de la defensa para indemnizar a la víctima. Después de múltiples aplazamientos el 27 de octubre de 2022 se corrió traslado por escrito del fallo.

CONSIDERACIONES DEL JUZGADO:

Para dictar sentencia condenatoria, conforme a los artículos 7 y 381 del C. de P.P., se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado.

Como el procesado aceptó los cargos por los cuales se les corrió traslado en el escrito de acusación, con ello renunció al juicio oral.

Como elementos materiales probatorios se cuenta con:

- Informe de la Policía de Vigilancia en casos de captura en flagrancia de fecha 03 de julio de 2021, suscrito por el PT. WILLIAM RICARDO GARCIA
- Acta de incautación de arma blanca
- Formato Único de Noticia criminal fecha 03 de julio de 2021, instaurada por la víctima CARMEN LOANA CAMPILLO
- Informe ejecutivo de 03 de julio de 2021, suscrito por el Investigador DANIEL SUMAZA VILLAMIZAR – Sijin MECUC
- Entrevista rendida por el agente captor PT. WILLIAM RICARDO GARCIA
- Reseña y Tarjeta decodactilar del capturado JAVIER CAMILO CELIS MANTILLA
- Oficio 20210286123 del 04 de julio de 2021 suscrito por el PT. LEONEL ENRIQUE CARVAJAL GUTIERREZ, funcionario Grupo Administración de Información Criminal SIJIN MECUC, sobre la carencia de antecedentes penales del procesado.

De los elementos materiales probatorios reseñados, analizadas en su conjunto, se infiere que la captura de CELIS MANTILLA se produjo en situación de flagrancia, al ser sorprendido y capturado con objetos de los cuales aparecía fundadamente que acababa de cometer un delito y al ser señalado por la víctima como autor del delito inmediatamente después de su perpetración.

Para la Fiscalía los hechos acreditados con elementos materiales probatorios, permitieron correr traslado de la acusación a JAVIER CAMILO CELIS MANTILLA como autor del delito de HURTO CALIFICADO ATENUADO.

La aceptación de la acusación por parte del acusado, aunado a la situación de flagrancia en que se capturó y a los elementos materiales probatorios reseñados, permiten tener como probada la materialidad del punible de HURTO CALIFICADO ATENUADO.

Se verificó que la aceptación de la acusación fue libre, voluntaria, debidamente asesorado por el Defensor público, que lo ilustró sobre sus derechos, sobre las consecuencias y alcances de su decisión.

Se observa que de los elementos materiales probatorios recaudados no emerge ningún hecho que encuadre en el art. 32 del C.P., como eximente de responsabilidad, por lo cual se le tiene como penalmente responsable a título de dolo.

Por lo anterior, puede afirmarse sin duda alguna que JAVIER CAMILO CELIS MANTILLA incurrió en el punible descrito en el artículo 240, inciso 2º del C. P, atenuado por cuanto el valor de lo hurtado no supera un s.m.l.m.v.

A su vez el comportamiento es antijurídico porque atentó contra el bien jurídico del patrimonio económico tutelado por la Ley Penal y culpable a título de dolo, pues el procesado conocía la ilicitud de su comportamiento y de manera voluntaria se determinó a realizarla, teniendo plena capacidad para hacerlo, no obstante haber podido actuar de otra manera. Por lo tanto la sentencia, tal y como se anunció es condenatoria.

CONDENA A LAS PENAS PRINCIPAL Y ACCESORIAS QUE CORRESPONDAN:

Para hacer la graduación de la pena, es preciso establecer los parámetros para la

determinación de los mínimos y máximos aplicables y luego tener en cuenta los fundamentos para la individualización de la pena.

El delito por el que ha sido procesado JAVIER CAMILO CELIS MANTILLA se encuentra tipificado en el C.P, Libro II, Título VII, –DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONOMICO-, Capítulo Primero –Del Hurto-, artículo 239, CALIFICADO conforme al artículo 240, inciso 2º, la pena será de prisión de OCHO (08) A DIECISEIS (16) AÑOS DE PRISION. Con la circunstancia de atenuación del artículo 268 del C.P. por cuanto lo hurtado tiene un valor menor de un s.m.l.m.v, quedando la pena de cuarenta y ocho (48) a ciento veintiocho (128) MESES DE PRISIÓN.

El ámbito de movilidad de la punibilidad es de OCHENTA (80) MESES y la diferencia entre un cuarto y otro, es de VEINTE (20) MESES DE PRISION. Quedando los cuartos quedan así:

Cuarto mínimo	48 a 68 meses
Primer cuarto medio	68 a 88 meses
Segundo cuarto medio	88 a 108 meses
Cuarto máximo	108 a 128 meses

INDIVIDUALIZACION DE LA PENA

De acuerdo a los parámetros del art. 61 del C.P., como son la gravedad de la conducta y que el procesado no presenta antecedentes penales vigentes, se ubicará en el cuarto mínimo y se impondrá una pena de CUARENTA Y OCHO (48) meses de prisión.

Como el procesado aceptó la acusación, al tenor del párrafo del art. 539 del C.P.P., adicionado por el art. 16 de la Ley 1826 de 2017, se reconocerá rebaja del 50% de la pena impuesta, quedando en VEINTICUATRO (24) meses de prisión.

Aplicando lo normado en el art. 269 del C.P por que el acusado indemnizó los perjuicios ocasionados con el delito, por lo cual la pena impuesta se disminuirá en el 75 %, quedando en seis (06) MESES DE PRISION.

Como pena accesoria se impondrá la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un período igual a la pena principal, al tenor de los artículos 44 y 51 del C.P.

DE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA

La defensa solicita se conceda la prisión en centro hospitalario por estado grave por enfermedad, conforme a lo normado en el numeral 4 del artículo 314 del C.P.P, presentando como sustento certificación de fecha 26 de septiembre de 2022, sobre que CELIS MANTILLA se encontraba internado en el HOSPITAL RUDESINDO SOTO desde el 30 de agosto de 2022, recibiendo tratamiento intrahospitalario psiquiátrico en el programa de rehabilitación y desintoxicación para el trastorno mental y del comportamiento debido al uso de múltiples drogas y al uso de sustancias psicoactivas denominado Trastorno ME.

Para conceder lo solicitado por la defensa se debe acreditar, un estado grave por enfermedad y que dicha patología y el tratamiento que exige, sea incompatible con la vida en reclusión.

Teniendo en cuenta lo anterior, de la certificación aportada por la Defensa, no es posible dar por cumplidos los requisitos exigidos por la norma en comento, en primer lugar, es cierto que el procesado presenta afectaciones de salud documentadas por médico especialistas en PSIQUIATRIA, pero no obra ningún concepto de los profesionales de la salud sobre que dichas patologías y el tratamiento que exigen, sea incompatible con la vida en reclusión del procesado. Precisándose, además que en el establecimiento de reclusión existe *una unidad para el manejo de personas con este diagnóstico.*

Por todo lo anterior no se accede a la solicitud de conceder la prisión en centro hospitalario, solicitada con fundamento en el numeral 4º del artículo 314 del C.P.P., con sus modificaciones.

Finalmente, por expresa prohibición legal no se concederá a JAVIER CAMILO CELIS MANTILLA la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni prisión domiciliaria al tenor del artículo 63 del Código Penal, modificado por el artículo 29 de la Ley 1709 de 2014 y el artículo 38 B del Código Penal, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014, por cuanto el HURTO CALIFICADO se encuentra incluido en el listado del inciso 2º del artículo 68 A del Código Penal, modificado por el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014.

Por tanto, deberá cumplir la pena de prisión privado de la libertad en el establecimiento carcelario que estipule el INPEC y bajo la coordinación del Juez de ejecución de penas. Por tal motivo líbrese la correspondiente orden de captura en contra de JAVIER CAMILO CELIS MANTILLA para el cumplimiento de la pena impuesta.

RECURSOS

Contra esta providencia procede el recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, el cual debe ser interpuesto y sustentado por escrito dentro de los cinco días siguientes, al traslado de la misma.

En firme esta determinación se dará la publicidad a que alude el art. 166 del C.P.P y se remitirá la actuación a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta para lo de su competencia.

Por lo anteriormente expuesto, este JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE LOS PATIOS CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

Primero: CONDENAR a JAVIER CAMILO CELIS MANTILLA, identificado con C.C No 1.092.389.610 de Villa del Rosario – Norte de Santander, de anotaciones personales y civiles conocidas en autos, a la pena principal de SEIS (06) MESES DE PRISION, como autor responsable del delito de HURTO CALIFICADO ATENUADO, en perjuicio de CARMEN LOANA CAMPILLO LOPEZ, con fundamento en la motivación precedente.

Segundo: IMPONER a JAVIER CAMILO CELIS MANTILLA la pena accesoria de INHABILITACION PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS por un lapso igual a la pena principal.

Tercero: No conceder a JAVIER CAMILO CELIS MANTILLA el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni prisión domiciliaria, ni la prisión en centro hospitalario por las razones expuestas. Por tal motivo líbrese la correspondiente orden de captura en contra de JAVIER CAMILO CELIS MANTILLA para el cumplimiento de la pena impuesta.

Cuarto: Ejecutoriada esta sentencia, comuníquese a todas las autoridades determinadas en los artículos 166 y 462 del C.P.P y se remítase el cuaderno a los juzgados de penas y medidas de seguridad de Cúcuta (N. de S.), para lo de su competencia

Quinto: Contra esta providencia procede el recurso de apelación ante la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Cúcuta, el cual debe ser interpuesto y sustentado por escrito dentro de los cinco días siguientes, al traslado de la misma

La jueza,

LUISA BEATRIZ TARAZONA GELVEZ

Firmado Por:
Luisa Beatriz Tarazona Gelvez
Juez Municipal
Juzgado De Circuito
Juzgado 002 Municipal Penal
Los Patios - N. De Santander

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **cf310613898084438e8eb79c7b205ad3beca343f56bf25329bbe83ca7d2bde8c**

Documento generado en 27/10/2022 09:13:59 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE LOS PATIOS, NORTE SANTANDER
CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO
DISTRITO JUDICIAL DE CUCUTA

RAD: 2020-00076 RAD. FISCALÍA: 544056001223201400286
PROCEDIMIENTO ABREVIADO
PROCESADO: BORIS ALEJANDRO GONZALEZ FLOREZ
DELITO: INASISTENCIA ALIMENTARIA
DECISIÓN: SENTENCIA CONDENATORIA

Los Patios, veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)

I. ASUNTO

Agotada la fase del juicio oral y anunciado el sentido del fallo condenatorio a **BORIS ALEJANDRO GONZALEZ FLOREZ**, acusado por el delito de **Inasistencia Alimentaria** en perjuicio de su menor hija, procede el Despacho a proferir la respectiva sentencia, no observándose irregularidad sustancial que invalide lo actuado.

II. IDENTIDAD DEL PROCESADO

BORIS ALEJANDRO GONZALEZ FLOREZ identificado con cédula de ciudadanía 13.271.129 expedida en Cúcuta, nacido el 21 de septiembre de 1985 en Cúcuta – Norte de Santander, de 37 años de edad, hijo de Socorro y Alejandro, ocupación albañil, residente en la avenida 5 # 28-49 barrio Patio Centro de esta municipalidad. Rasgos morfológicos: estatura 1.70 mts, piel trigueña y contextura media.

III. ANTECEDENTES FACTICOS:

Están relacionado en el escrito de acusación de la siguiente forma: *"la señora Adriana Ines Burgos Bustos y el señor Boris Alejandro González, son los progenitores de la menor VTGB para la cual se solicitan los alimentos de ley por parte de su señor padre.*

La denunciante allegó registro civil de nacimiento de la menor suscrito en la Notaria Cuarta del Circulo de Cúcuta a fin de demostrar el parentesco civil de la menor con sus padres; allegó el acta de fijación de cuota de alimentos celebrada en la Comisaria de Familia de este municipio el 02 de abril de 2011, diligencia en la que se fijó una cuota mensual para la manutención de la menor por valor de \$100.000, más la cuota extraordinaria los meses de junio y diciembre más los incrementos de ley.

El señor Boris Alejandro González Florez no ha cumplido con el pago de las mesadas alimenticias, no obstante de haber suscrito la obligación ante la Comisaria de Familia el 02 de abril de 2011 y tener conocimiento de la presente investigación en su contra, ya que el Despacho lo ha tenido en contacto de manera telefónica y también se le ha citado para acercarlo a la investigación siempre con excusas de tener mucho trabajo y no poder asistir a las audiencias, donde se concluye que Boris Alejandro, deriva sus sustento laboralmente y que bien podría contribuir con la manutención de la menor ya que la mesada impuesta por la Comisaria es muy bajita".

IV. ANTECEDENTES PROCESALES:

EL 23 de junio de 2020, el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías de los Patios, realizó audiencia de contumacia en contra de BORIS ALEJANDRO GONZALEZ FLOREZ, siendo declarado contumaz y corriéndose traslado del escrito de acusación al defensor del procesado.

El 08 de julio de 2020, la Fiscalía Primera local de Los Patios radicó escrito de acusación, correspondiendo por reparto a esta Agencia Judicial. El 13 de agosto de 2020 se avocó

conocimiento y se señaló el 01 de octubre de 2020 para realización de audiencia concentrada.

El 01 de octubre de 2020, se aplazó la diligencia a solicitud de la defensa del procesado y señaló el 26 de noviembre de 2020.

El 26 de noviembre de 2020, se inició audiencia concentrada. Se programa para el 11 de diciembre de 2020, para la continuación de la audiencia.

El 11 de diciembre de 2020, se aplaza la diligencia debido a la ausencia del apoderado del procesado. Se señaló el 15 de enero de 2021. En dicha diligencia, la defensa solicitó un receso con el fin de buscar un principio de oportunidad. Luego del receso la fiscalía solicita suspensión de la diligencia para radicar solicitud de principio de oportunidad. El despacho accede y señaló el 12 de febrero de 2021, fecha en la cual no se pudo realizar debido a la ausencia del defensor del procesado. Se procedió a señalar el 23 de marzo de 2021.

Para el 23 de marzo de 2021, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, concedió compensatorio a la suscrita, en consecuencia, mediante auto del 01 de marzo de 2021 se programó para el 29 de abril de 2021.

El 29 de abril de 2021, se finalizó la audiencia concentrada y se señaló el día 10 de junio de 2021, para inicio de juicio oral.

El 10 de junio de 2021, inició juicio oral, se presentó la teoría del caso y se inicia la etapa probatoria de la fiscalía. Se señaló el 10 de agosto de 2021.

El 10 de agosto de 2021, el despacho procede a DECRETAR la NULIDAD de la audiencia juicio oral celebrada el 10 de junio de 2021. NO habiendo sido recurrida la presente decisión se declaró su ejecutoria. Se fijó para inicio de juicio oral el día 30 de septiembre de 2021.

Para el 30 de septiembre de 2021, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, concedió compensatorio a la suscrita, y mediante auto del 29 de septiembre de 2021 se programó la nueva fecha para el 14 de octubre de 2021.

El 14 de octubre de 2021, se da inicio del juicio oral, se presentan la teoría del caso y se inicia la etapa probatoria de la fiscalía. Se señaló el 21 de octubre de 2021, fecha en la cual no se puede realizar la audiencia debido a que el Despacho se encontraba en audiencia URI, se reprogramó para el 18 de noviembre de 2021.

El 18 de noviembre de 2021, se da por agotada la etapa probatoria de la fiscalía. Y se señala para continuar con la etapa probatoria de la defensa el 07 de diciembre de 2021.

El 07 de diciembre de 2021, la fiscalía solicita aplazamiento de la diligencia y el despacho aceptó la solicitud y señaló el 12 de enero de 2022

El 12 de enero de 2022, la juez encargada de las vacaciones de la titular del despacho, le fueron concedidos compensatorio por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura. Mediante auto del 17 de enero de 2022, señaló para el 03 de marzo de 2022.

Para el 03 de marzo de 2022, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, concedió compensatorio a la suscrita, en consecuencia, mediante auto del 01 de marzo de 2022 se programó la nueva fecha para la continuación de la audiencia concentrada y se fijó el 03 de mayo de 2022.

El 03 de mayo de 2022, la fiscalía solicitó aplazamiento debido a que no ha obtenido respuesta a la OPJ. Se señaló el 08 de junio de 2022

El 08 de junio de 2022, Se deja constancia por parte del estrado judicial que el inicio de este proceso de inició con la declaración de contumacia de BORIS ALEJANDRO GONZALEZ

FLOREZ por parte del Juzgado Primero Penal Municipal de Los Patios, por lo cual es evidente que el procesado no ha tenido la voluntad de asistir a las audiencias programadas por parte de este despacho, estando demostrado que siempre ha vivido en la misma dirección y que siempre una persona de sexo femenino manifiesta, cuando se van a llevar las notificaciones, que ya no reside en esa dirección, pero todos los vecinos de esa residencia indican que el procesado si vive en esa dirección y es tan cierto que una vez al entregársele el número del citador a esa persona, a los diez minutos GONZALEZ FLOREZ llamó al citador. Se solicitó por parte de la defensa el aplazamiento de la audiencia toda vez que el procesado se reunirá el lunes con la madre de la víctima. No se presentan objeciones. Se señaló como nueva fecha el 22 de junio de 2022.

Debido a la suspensión de términos ordenada por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, se aplazó la diligencia del 22 de junio de 2022 y se procedió a programar como nueva fecha el 10 de agosto de 2022.

El 10 de agosto de 2022, debido a la ausencia del Fiscal se aplazó la diligencia y se procedió a señalar el día 01 de septiembre de 2022, para la continuación del juicio oral.

El 01 de septiembre de 2022, se da por agotado la etapa probatoria de la defensa y clausurado el debate probatorio. Se señala el 02 de septiembre de 2022, para la audiencia de alegatos de conclusión.

El 02 de septiembre se aplazó la diligencia debido a problemas de conectividad y se señala el 07 de septiembre de 2022, fecha en la cual se emitió el sentido del fallo condenatorio y se evacua el artículo 447, señalándose el 22 de septiembre de 2022 para el traslado del fallo, diligencia que se aplaza a solicitud de la defensa y se señaló el día 27 de octubre de 2022 para el traslado del fallo por escrito.

V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Sea lo primero en señalar que este Despacho es competente para tramitar la presente actuación, atendiendo lo establecido en el artículo 37 de la Ley 906 de 2004.

Agotada la etapa del juicio oral, corresponde al despacho poner fin a la instancia con la sentencia de acuerdo al sentido del fallo pronunciado al final de la audiencia de juicio oral.

El delito de inasistencia alimentaria es una conducta ilícita de infracción al deber. El artículo 233 de la Ley 599 de 2000 la describe en los siguientes términos:

"El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena será de prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses y multa de veinte (20) a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor."

Reiteradamente el órgano de cierre en materia penal¹ ha dicho que el delito de inasistencia alimentaria se estructura a partir de los siguientes elementos: (i) la existencia de un vínculo o parentesco entre alimentante y alimentado, del que deriva la obligación legal de suministrar alimentos; (ii) la sustracción total o parcial de la obligación alimentaria, y (iii) la inexistencia de una justa causa, esto es, que el incumplimiento se lleve a cabo sin motivo o razón que lo justifique.

¹ SP19806 del 23 de noviembre de 2017, radicado 44.758 y SP4920 del 13 de noviembre de 2019, radicado 55.515, entre otros.

También la jurisprudencia de la Sala ha precisado que, en la determinación del carácter justo o injusto de la infracción al deber de brindar asistencia alimentaria, es necesario establecer que el obligado cuente con los medios para atender la obligación alimentaria, la cual se fundamenta tanto en *“la necesidad del beneficiario como en la capacidad del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia”*.²

Por ende, si el obligado no cuenta con recursos económicos mal puede deducirse su responsabilidad penal, pues no se trata de una conducta voluntaria y deliberada, sino que obedece a circunstancias que pueden catalogarse de fuerza mayor, conclusión que se sustenta en que *«la punibilidad de la sustracción a la obligación de prestar alimentos no puede transgredir el principio jurídico cifrado en que nadie está obligado a lo imposible»*.³

Conforme a la acusación por el delito de Inasistencia Alimentaria presentada por la Fiscalía Primera Local en contra de **BORIS ALEJANDRO GONZALEZ FLOREZ**, y determinada su responsabilidad penal en juicio, se sabe que la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal⁴ – se ha ocupado del punible en cita y frente a los mandatos constitucionales que señalan a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y el deber de los padres de responder por los alimentos de los hijos mientras sean menores de edad o impedidos, señaló que

“el sostenimiento –el auxilio, la protección, el amparo, la alimentación, la entrega de lo necesario para la manutención- de la prole corresponde a los padres en igualdad de condiciones.

La efectividad de esa tarea comprende, además, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, la educación, la cultura y la recreación, entre otros aspectos que garantizan el desarrollo armónico e integral de los infantes y los adolescentes. Esos elementos, en términos del artículo 44 de la Carta Política, se erigen en derechos fundamentales de los menores, mandato éste que es reiterado por el artículo 3° de la Ley 294 de 1996.

De conformidad con los artículos 411 y siguientes del Código Civil, los descendientes (los hijos) son titulares del derecho de alimentos congruos, definidos como los que habilitan “para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social” (por oposición a los necesarios, “que le dan lo que basta para sustentar la vida”) y que comprenden, además, “la obligación de proporcionar al alimentario... la enseñanza primaria y la de alguna profesión u oficio”.

Frente a la responsabilidad del autor en la conducta punible de inasistencia alimentaria estableció que el legislador tradicionalmente la ha previsto para quien *“se sustraiga **sin justa causa** a la prestación de alimentos legalmente debidos.”*

Y que al *“incluir dentro de la definición típica el elemento **“sin justa causa”**. Con ello se requiere dar a entender que el delito se estructura con el incumplimiento en la prestación de alimentos, siempre y cuando se haga sin motivo, sin razón que lo justifique, esto es, el dejar de hacer lo que se debe hacer tiene que ser infundado, inexcusable.”*

Al punto que la Corte Constitucional en sentencia C-237 del 20 de mayo de 1997 declaró la constitucionalidad de la norma que define la conducta punible de inasistencia alimentaria,

² SP del 19 de enero de 2006, radicado 21.023; SP19806 del 23 de noviembre de 2017, radicado 44.758 y SP4920 del 13 de noviembre de 2019, radicado 55.515.

³ SP del 4 de diciembre de 2008, radicado 28.813; SP1984 del 30 de mayo de 2018, radicado 47.107 y SP405 del 10 de febrero de 2021.

⁴ Proceso No 21161, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado ponente: YESID RAMÍREZ BASTIDAS Aprobado Acta N° 026. Bogotá, D. C., marzo veintitrés (23) de dos mil seis (2006).

dejando en claro que no puede ser responsable quien incumple sus deberes determinado por una "**justa causa**":

"El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: la necesidad del beneficiario y la capacidad del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia..."

Así las cosas, para el derecho penal la obligación surge del parentesco existente entre alimentante y alimentado, que el presente caso concreto la obligación surge del vínculo de parentesco de consanguinidad ascendiente - descendiente, es decir, la hija del acá acusado a quien le asiste el deber legal de suministrar alimentos, entendidos no en el concepto restringido de procurar sólo la alimentación, sino el de la satisfacción de todas las necesidades del menor conforme lo previsto en el artículo 24 de la Ley 1098 de 2006⁵.

Ninguna controversia suscita este aspecto como quiera fue objeto de estipulación probatoria entre la Fiscalía y la defensa en la audiencia concentrada (Art. 542) y se introdujo en el juicio oral el registro civil de nacimiento de la menor BTGB, en el cual se evidencia no solo el parentesco de ella con el acusado, sino también que para la fecha que se fijó la cuota alimentaria era menor de edad.

Los registros en mención son documentos públicos cobijados con la presunción de autenticidad prevista en el artículo 425 del C.P.P.⁶.

Así las cosas, identificado plenamente el acusado, vale decir conforme se estipuló por las partes y se incorporó al juicio el Formato web aportado por la Registraduría del Estado civil, donde se plasma la identificación de Boris Alejandro González Flórez con Cédula 13271129, establecida su relación de padre con su hija, el monto mensual de la obligación y lo adeudado a partir del momento en que fue impuesta la cuota de alimentos, no acreditándose ninguna consignación por parte del acusado, por lo que existe una omisión en el pago de la citada suma de dinero, quedando demostrado el aspecto objetivo.

Sin embargo, la conducta no se tipifica por la simple omisión en el suministro de los emolumentos necesarios para la manutención de los descendientes, la norma incluye un ingrediente normativo consistente en que dicha sustracción no sea injustificada.

Resulta trascendental establecer no sólo la capacidad económica del procesado, sino también su plena capacidad de ejercicio de sus facultades físicas y mentales que le permitan el desarrollo de una actividad lícita mediante la cual pueda realizar un despliegue mínimo de actividad en aras de cumplir con su deber constitucional y legal en proveer los alimentos a quien le es debido, en consideración a que juega papel importante al momento de valorar si la omisión es justificada o injustificada, puesto que a nadie se le puede exigir que dé lo que no tiene ni lo que le es imposible.

Para resolver el presente caso, se tienen lo siguiente:

- Teoría del caso (Audiencia 14 de octubre de 2021):

⁵ ARTÍCULO 24. DERECHO A LOS ALIMENTOS. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto.

⁶ **Artículo 425.** Documento auténtico. Salvo prueba en contrario, se tendrá como auténtico el documento cuando se tiene conocimiento cierto sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producido por algún otro procedimiento. También lo serán la moneda de curso legal, los sellos y efectos oficiales, los títulos valores, los documentos notarial o judicialmente reconocidos, los documentos o instrumentos públicos, aquellos provenientes del extranjero debidamente apostillados, los de origen privado sometidos al trámite de presentación personal o de simple autenticación, las copias de los certificados de registros públicos, las publicaciones oficiales, las publicaciones periódicas de prensa o revistas especializadas, las etiquetas comerciales, y, finalmente, todo documento de aceptación general en la comunidad.

Fiscalía: La Fiscalía indicó que demostraría, más allá de toda duda razonable que el señor Boris Alejandro González Flórez se ha sustraído sin justa causa y en forma permanente de la obligación de dar alimentos a su menor hija de nombre BTGB.

En dicha sesión se incorporaron las estipulaciones:

- ✓ Formato web de la Registraduría del Estado civil, donde se plasmó la identificación de Boris Alejandro González Flórez con Cédula.
- ✓ El oficio del 17 de noviembre del 2016 donde la Policía Metropolitana certifica que el procesado no registra antecedentes penales.
- ✓ El registro civil de la menor BTGB con el cual se demuestra el parentesco que existe entre la menor víctima y el procesado.
- ✓ La Audiencia conciliación donde se fijan los alimentos al señor Boris Alejandro González en la Comisaría de familia suscrita por el procesado.

Se recibieron los testimonios de Adriana Inés Burgos, Salvador Burgos Villamizar y Orlando Bustos, quienes manifestaron conocer al señor Boris Alejandro González, de quien dijeron no aporta nada para la crianza de su hija BTGB. Que es la madre quien le da todo lo que puede con la ayuda de sus familiares.

En sesión del 18 de noviembre de 2021, se recibió el testimonio de Jhon Edison Sierra, quien indicó que realizó entrevista a la denunciante y a los testigos que ella presenta, se realiza la solicitud de antecedentes penales, solicitud de la página web de la Registraduría y de la Oficina de instrumentos públicos sobre los bienes que pueda poseer el indiciado y se realiza la verificación de la residencia. Que para ese entonces no ubicó al procesado, el arraigo lo realizó con la madre de la víctima y los testigos que manifestaron donde vivía el procesado y las características de la vivienda.

Después de múltiples aplazamientos para lograr la comparecencia del señor Boris Alejandro González Florez en sesión del 01 de septiembre de 2022, indicó:

"... con la señor Adriana si le he hecho propuestas de pago pero no hemos llegado a un acuerdo, le he propuesto cosas materiales que no son mías, la otra vez me iban hacer un préstamo en el banco pero me dijo que no,...la otra vez yo le iba a consignar una plata por JJ PITA, en pandemia bien, charlamos, yo le colabore lo más que podía, llegamos a un acuerdo el cual era que yo le iba a buscar una plata y después me dijo que no, hace 1 año y medio me dijo que le tenía que dar 14 millones de pesos y yo le dije que no, le iba a dar 9 millones que me iban a hacer un préstamo pero ella no los quiso recibir, que tenía que ser todo de una vez, ... ahorita trabajo día a día, tengo que mantener a mi familia, tengo a mi señora y la verdad me veo corto, yo si tengo la intención, yo le dije a la Doctora María Elena que si me fijan una cuota y ella está de acuerdo, una cuota moderada yo la pago, pero no para pagar lo pasado y seguir endeudado, póngame una cuota moderada y póngame una cuota alimentaria que yo pueda cumplir, la situación está difícil"

Es que, de quien se demostró la calidad de padre de una menor hija a quien abandonó en prodigar lo necesario para su subsistencia, que como padre sabe lo difícil que resulta a su madre valerse por sí misma para prodigar aquello que le resulta exigible cumplir también al padre en igualdad de condiciones, definitivamente denota una sustracción intencional de su deber en condiciones mínimas y lesiona así **GONZALEZ FLOREZ** el bien jurídico tutelado de la familia al no buscar precisamente ese mínimo de satisfacción de su obligación alimentaria. Se insiste, el acusado como obligado conocía de la existencia del deber y libre y voluntariamente decidió incumplirlo, no logrando justificar su incumplimiento de suministrar alimentos a su menor hija.

Ha señalado la jurisprudencia, que con el fin de determinar el carácter justo o injusto de la infracción al deber de brindar asistencia alimentaria, es necesario establecer que el obligado cuente con los medios para atender la obligación alimentaria.

En este caso, BORIS ALEJANDRO GONZALEZ FLOREZ manifestó que ha venido laborando ininterrumpidamente en el área de la construcción, desempeñándose como MAESTRO DE CONSTRUCCION a tal punto que resalta el cumplimiento de las obligaciones alimentarias con otros hijos de 14 y 16 años, pero ha abandonado a la menor VTGB dejando toda la carga a la madre y excusando su actuar omisivo en la mala relación con la señora ADRIANA BURGOS.

De las anteriores manifestaciones, se evidencia que el procesado ha contado con ingresos económicos que le ha permitido contribuir económicamente con la manutención y sostenimiento de sus otros hijos, y además el desinterés y desatención permanente en colaborar con las obligaciones alimentarias de su menor hija VTGB.

Nótese que ha contado con la posibilidad de aportar sumas de dinero y llegado a acuerdos con la madre de la menor, pero luego desatendió las obligaciones que adquirió, dejando en total abandono a su congénere, pese a desarrollar una actividad que le permite obtener ingresos económicos para contribuir con los alimentos que requiere su menor hija.

Ademas es de recalcar, que cuando el procesado ha acudido a los distintos escenarios procesales que ha sido convocado para acordar el valor de la cuota aliementaria de su menor hija, suscribió el acta respectiva, sin oposicion alguna, resultado ilogico que ofreciera efectuar pagos sin contar con la capacidad economica que ahora deniega.

Es claro que el procesado voluntaria e intencionalmente optó por abandonar materialmente en forma permanente a su descendiente, excusandose en la mala relacion con la madre de la menor e incluso de manera denigrante señaló que la menor tiene mas de seis papas.

Entonces es evidente, que BORIS ALEJANDRO GONZALEZ FLOREZ de manera espontánea a las preguntas realizadas por su abogado defensor, indicó que desde hace 15 años ha laborado como maestro de construcción, producto del cual ha recibido una remuneración, con la cual ha cumplido con la obligación de sus toros hijas de 14 y 16 años de edad. Además que no ha cumplido con la obligación alimentaria con la menor por los problemas que ha tenido con la madre de la menor.

Está claro que el incumplimiento de la obligación alimentaria a cargo de GONZALEZ FLOREZ ha ocurrido de manera total. En razón a que se le fijó como cuota alimentaria y no realizó consignación alguna del periodo que se reclama alimentos demostrándose con esto, **una plena desatención alimentaria**.

Entonces es claro que, la omisión total en el pago de la cuota alimentaria atribuida BORIS ALEJANDRO GONZALEZ FLOREZ ocurrió sin justa causa, pese a contar con los medios para atender la obligación alimentaria, como quedo establecido en el testimonio rendido, en el que incluso agregó que en varias oportunidades tuvo la intención de cancelar la omisión alimentaria con prestamos de dinero, pero como ADRIANA BURGOS le dijo que arreglaban con nueve millones de pesos y luego le dijo que debía cancelar catorce millones de pesos, no le hicieron los prestamos requeridos para cancelar la omisión alimentaria.

Véase como el señor GONZALEZ FLOREZ, sin dubitación alguna manifestó que ha tenido trabajo y con el mismo mantiene a su familia, lo que permite tener certeza que percibe una remuneración y es consciente de la deuda que tiene por incumplimiento de la asistencia alimentaria para con su hija.

Entonces está demostrado la inexistencia de una justa causa, que impidiera a GONZALEZ FLOREZ haber cumplido con la obligación alimentara de su hija, monto sobre el cual tenia conocimiento al haber suscrito el acta de la Comisaria de Familia de Los Patios en donde fueron fijados.

Finalmente, no es aceptable para esta Agencia Judicial la excusa del procesado de que ha tenido capacidad económica para cumplir la obligación alimentaria para con sus dos hijos

de 14 y 16 años, pero no ha tenido la capacidad económica, ni siquiera para hacer abonos esporádicos o mínimos, para la obligación alimentaria con la menor víctima.

La Constitución Política de Colombia reconoce a los niños, Las niñas y los adolescentes como sujetos titulares de derechos y consagra en sus artículos 44 y 45 su Protección integral y la *prevalencia* de sus derechos sobre los derechos de los demás. El derecho de alimentos tiene origen en el deber de solidaridad que existe entre las familias, razón por la cual dicha obligación suele derivarse del parentesco.

La sentencia C-994 del 2004 de la Corte Constitucional en sus apartes resalta el fundamento del derecho de alimentos, manifestando: *"El fundamento constitucional del derecho de alimentos es el principio de solidaridad social (Arts. 1º y 95, Num. 2) En el interior de la familia, por ser ésta la institución básica de la sociedad (Art. 5º) o el núcleo fundamental de la misma (Art. 42), por lo cual, por regla general, una de sus condiciones es el parentesco de consanguinidad o civil entre alimentario y alimentante, en los grados señalados en la ley, o la calidad de cónyuge o divorciado sin su culpa"*.

La Sentencia C-919 de 2001 de la Corte Constitucional define el derecho de alimentos como: *"El derecho de alimentos es aquél que le asiste a una persona para reclamar de la persona obligada legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia, cuando no está en capacidad de procurárselo por sus propios medios. Así, la obligación alimentaria está en cabeza de quien, por ley, debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de los alimentos"*.

En este mismo sentido la Corte Suprema de Justicia ha expresado *"la obligación alimentaria es un deber jurídico impuesto a una persona para asegurar la subsistencia de otra, deber que puede provenir de la ley, de una convención o de testamento"* (Sentencia del 13 de noviembre de 1994. M.P. Héctor Marín Naranjo.)

En este estadio, es necesario indicar que lo manifestado por el Fiscal en sus alegatos de conclusión, sobre la información obtenida con posterioridad a la audiencia concentrada y que por tal motivo no pudo ser incorporada al acervo probatorio, se observa una falta de diligencia de los fiscales que le antecedieron y no deben ser tenidos en cuenta por este Estrado Judicial.

Dicho todo lo anterior, tratándose de una persona imputable, pues no existe en el plenario evidencia de lo contrario y no concurriendo a su favor circunstancias excluyentes de la antijuridicidad y de la culpabilidad, puede predicarse más allá de toda duda que **BORIS ALEJANDRO GONZALEZ FLOREZ** es penalmente responsable del delito de Inasistencia Alimentaria por el cual resultó acusado por la Fiscalía Primera Local de esta municipalidad.

Finalmente sobre las alegaciones de la defensa, el despacho en forma respetuosa se aparta de su pretensión absolutoria, ya que, si quedó demostrada con las manifestaciones del procesado en el testimonio rendido, que desde hace 15 años desempeña la labor de maestro de obra y ha devengado una remuneración para su sustento y el de su familia, su esposa y dos hijos de 14 y 16 años y que la sustracción de la obligación alimentaria demandada fue sin justa causa, motivada por la decisión voluntaria de GONZALEZ FLOREZ de no aportarlos, POR LA MALA RELACION CON LA MADRE DE LA MENOR.

Se observa que de los elementos materiales probatorios recaudados no emerge ningún hecho que encuadre en el art. 32 del C.P., como eximente de responsabilidad, por lo cual se le tiene como penalmente responsable a título de dolo.

Por lo anterior, puede afirmarse sin duda alguna que BORIS ALEJANDRO GONZALEZ FLOREZ incurrió en el punible descrito en el artículo 233, inciso 2º del C. P.

A su vez el comportamiento es antijurídico porque atentó contra el bien jurídico de la familia tutelado por la Ley Penal y culpable a título de dolo, pues el procesado conocía la ilicitud de su comportamiento y de manera voluntaria se determinó a realizarla, teniendo plena

capacidad para hacerlo, no obstante haber podido actuar de otra manera. Por lo tanto la sentencia, tal y como se anunció es condenatoria.

CONDENA A LAS PENAS PRINCIPAL Y ACCESORIAS QUE CORRESPONDAN:

Para hacer la graduación de la pena, es preciso establecer los parámetros para la determinación de los mínimos y máximos aplicables y luego tener en cuenta los fundamentos para la individualización de la pena.

La conducta endilgada a **BORIS ALEJANDRO GONZALEZ FLOREZ**, luego de ser vencido en juicio oral, es la descrita, en el Código Penal, Libro II, TITULO VI **DELITOS CONTRA LA FAMILIA**, CAPITULO IV, **INASISTENCIA ALIMENTARIA** ART. 233 INCISO 2º, por ser la víctima un menor de edad, INASISTENCIA ALIMENTARIA, a título de autor.

La pena será de prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses y multa de veinte (20) a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor.

El ámbito de movilidad de la punibilidad es de cuarenta (40) MESES y la diferencia entre un cuarto y otro, es de diez (10) meses. Quedando los cuartos quedan así:

Cuarto mínimo	32 a 42 meses
Primer cuarto medio	42 a 52 meses
Segundo cuarto medio	52 a 62 meses
Cuarto máximo	62 a 72 meses

INDIVIDUALIZACION DE LA PENA

La calificación jurídica de la acusación se enmarcó en el artículo 233 de la Ley 599 de 2000, inciso 2º, en razón a que la víctima es un menor de edad, sancionado con *pena de prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses y la multa de veinte (20) a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor*. Ahora como en la acusación no se imputaron circunstancias de mayor punibilidad y concurre la de menor punibilidad, carencia de antecedentes, la pena habrá de dosificarse en el primer cuarto que oscila entre 32 y 42 meses, en consideración a que la lesividad al bien jurídico es la misma conforme al delito, y en razón de la intensidad del dolo y el daño irrogado a la víctima, se impondrá a **BORIS ALEJANDRO GONZALEZ FLOREZ** la pena de treinta y dos **(32)** meses de prisión.

Conforme los criterios anteriores se impondrán al procesado como pena de multa la mínima establecida en veinte **(20)** salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Como pena accesoria se impondrá la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por periodo igual a la pena privativa de la libertad al tenor de lo normado en los artículos 44 y 52 del Código Penal.

DE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA

Sobre la suspensión condicional de la ejecución de la pena si bien se cumple la exigencia objetiva del artículo 63 del Código Penal, debe tenerse en cuenta lo consignado en el numeral 6º del artículo 193 del Código de Infancia y Adolescencia, el cual excluye la concesión de este subrogado penal cuando las víctimas son niños y no se ha acreditado ni el pago de los perjuicios ocasionados con el delito. Por lo anterior, por expresa exclusión normativa se negará el subrogado penal.

Ahora bien, respecto de la prisión domiciliaria el artículo 38B del Código Penal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014⁷, consagra como presupuestos que la sentencia

⁷ Artículo 23. Adicionase un artículo [38B](#) a la Ley 599 de 2000, del siguiente tenor:

se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de ocho (8) años de prisión o menos; que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2° del artículo 68ª de la Ley 599 de 2000 y que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado. De igual manera debe decirse que conforme el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, no se trata de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, es decir no existe prohibición legal.

Ningún reparo advierte el despacho en la superación de la primera exigencia objetiva como quiera que el mínimo de la pena prevista para el delito es de 32 meses, el delito de Inasistencia Alimentaria no está incluido en la exclusión normativa que prevé el artículo 68A del Código Penal y respecto del arraigo familiar y laboral del sentenciado, considera el despacho que se trata de una persona de cuya conducta personal y procesal como acusado, salvo el reproche frente al injusto penal, permiten al juzgado hacer una valoración en su favor con el fin de buscar un impacto menos gravoso en sus intereses al igual que los de sus hijos, razón por la cual quedará supeditado el cumplimiento de la pena en su residencia a la suscripción de diligencia de compromiso al tenor de lo señalado en los literales a, b, c, y d del numeral 4° del artículo 23 de la Ley 1709 de 2014, obligaciones que garantizará mediante pago de caución prendaria por la suma de \$200.000 pesos.

Para el cumplimiento de la pena de prisión en su residencia se ordenará la captura de **BORIS ALEJANDRO GONZALEZ FLOREZ**, quien, suscrita el acta de compromiso, prestada la correspondiente caución, gozará de la prisión domiciliaria concedida en la presente sentencia.

El sentenciado podrá trabajar, siempre y cuando acredite los requisitos exigidos para ello ante el señor Juez de Ejecución de Penas.

RECURSOS

Contra esta providencia procede el recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, el cual debe ser interpuesto y sustentado por escrito dentro de los cinco días siguientes, al traslado de la misma.

En firme esta determinación se dará la publicidad a que alude el artículo 166 del C.P.P y se remitirá la actuación a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta para lo de su competencia.

Por lo anteriormente expuesto, este JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE LOS PATIOS CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

Artículo 38B. Requisitos para conceder la prisión domiciliaria. Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria:

1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de ocho (8) años de prisión o menos.
 2. Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2° del artículo 68A de la Ley 599 de 2000.
 3. Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado.
- En todo caso corresponde al juez de conocimiento, que imponga la medida, establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuación la existencia o inexistencia del arraigo.
4. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
 - a) No cambiar de residencia sin autorización, previa del funcionario judicial;
 - b) Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia;
 - c) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello;
 - d) Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

PRIMERO: CONDENAR a BORIS ALEJANDRO GONZALEZ FLOREZ identificado con la cédula de ciudadanía No 13.271.129 expedida en Cúcuta de anotaciones personales y civiles conocidas en autos, como AUTOR penalmente responsable del delito de **Inasistencia Alimentaria** y en consecuencia, se impone la pena de **treinta y dos (32) meses de prisión y multa equivalentes a veinte (20) s.m.l.m.v**, conforme a lo consignado en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Imponer a BORIS ALEJANDRO GONZALEZ FLOREZ, como pena accesoria la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por periodo igual a la pena de prisión, a tenor de lo señalado en los artículos 44 y 52 del Código Penal.

TERCERO: Denegar la suspensión condicional de la ejecución de la pena y **conceder** el sustitutivo de la prisión domiciliaria prevista en el artículo 38B del Código Penal, previo el estricto cumplimiento de las exigencias señaladas en la parte considerativa de la providencia. **Librese** orden de captura en contra de **BORIS ALEJANDRO GONZALEZ FLOREZ**, para el cumplimiento de la pena de prisión domiciliaria en los estrictos términos fijados en la presente sentencia, conforme la motivación.

CUARTO: Ejecutoriada la sentencia remítase copia de lo pertinente al Juez de Ejecución de Penas de Cúcuta, reparto, para lo de su competencia.

Quinto: Contra esta providencia procede el recurso de apelación ante la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Cúcuta, el cual debe ser interpuesto y sustentado por escrito dentro de los cinco días siguientes, al traslado de la misma

La jueza,

LUISA BEATRIZ TARAZONA GELVEZ

Firmado Por:
Luisa Beatriz Tarazona Gelvez
Juez Municipal
Juzgado De Circuito
Juzgado 002 Municipal Penal
Los Patios - N. De Santander

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **abedd09f07bf98f495f52a88100aa2062014e54d93733f5fdb377ee5a86835fc**

Documento generado en 27/10/2022 01:24:35 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>